

Orígenes del movimiento de oposición a la minería metálica en El Salvador

Rafael E. Cartagena*

Resumen

En 2005, surgió en El Salvador un movimiento social opuesto a las exploraciones de oro y metales asociados. Una de sus características ha sido su composición multisectorial, al estar liderado por organizaciones comunales, ONG de desarrollo rural, grupos ambientalistas, sectores de la Iglesia católica, entre otros. Tal diversidad da cuenta del desarrollo del socioambientalismo, es decir, de la convergencia entre una *crítica distributiva*, de la cual son portadores los movimientos sociales por la justicia social, y una *crítica ecológica*, desplegada por el movimiento ecologista.

Palabras clave:

movimientos sociales, ambientalismo, conflictos ambientales, sostenibilidad, exploraciones mineras.

* Investigador en ciencias sociales, especializado en temas relativos a la sociología ambiental, entre ellos, luchas y conflictos socioambientales, movimiento ambientalista. Correo electrónico: rafa.semueve@gmail.com

Introducción

En El Salvador, así como en otros países, las luchas contra proyectos de minería metálica son un buen indicador sobre las coincidencias entre una parte del movimiento ambientalista, el movimiento social popular más amplio y un sector de las ONG afín a ambos¹. Ciertamente, desde la década de 1990, no se había conformado en el país una alianza multisectorial tan amplia en torno a un asunto ambiental particular.

La primera parte del artículo ofrece un relato de cómo surgió y se desarrolló el conflicto en torno a la minería metálica entre 2005 y 2008². La segunda parte se ocupa de la representatividad del movimiento opuesto a la minería. Luego, se sistematizan los riesgos que se derivan de la actividad minera, desde la perspectiva de las organizaciones movilizadas. Finalmente, el cierre es una reflexión teórica que propone tres categorías de análisis para comprender mejor el fenómeno del socioambientalismo, es decir, de la convergencia entre el movimiento ambientalista y otros movimientos sociales: *distribución socioecológica*, *crítica distributiva* y *crítica ecológica*³.

Las fuentes consultadas fueron, sobre todo, dirigentes y personal a cargo de organizaciones que, hacia octubre de 2006, habían hecho público su rechazo al desarrollo de la minería de oro, muchas de ellas integradas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (en adelante “la Mesa”). En total, se entrevistó de forma individual a 18 personas, entre los años 2005 y 2008. También, se realizaron dos entrevistas colectivas con integrantes de organizaciones del departamento de Cabañas, en las que participaron más de una docena de

personas. Dichos testimonios se complementaron con algunos documentos elaborados por las organizaciones de la Mesa. Adicionalmente, se consultaron medios de prensa y algunos informes hechos públicos por las empresas mineras involucradas.

1. Origen y desarrollo del conflicto en torno a la minería metálica

El movimiento de oposición a la minería metálica surgió de manera simultánea en Chalatenango y Cabañas, pero de manera independiente en cada departamento, según el estado de avance de las exploraciones mineras y, sobre todo, las particularidades históricas y sociopolíticas de cada uno.

1.1. Los proyectos mineros en Chalatenango y Cabañas

El cantón San Francisco, de San Isidro, Cabañas, ha sido el centro de las exploraciones de El Dorado, un proyecto de minería de oro subterránea, en el mismo sitio donde ya funcionó una mina en las décadas de 1940 y 1950 (Henríquez, 2008, p. 12; Pereira, 2006, entrevista). Los estudios para reabrir la mina comenzaron en 1993, y en 2002 la concesión de exploración fue adquirida por la canadiense Pacific Rim Mining Corp. (Henríquez, 2008, p. 17), empresa que extendió las exploraciones a los municipios de Sensuntepeque y Guacotecti. Pacific Rim suspendió sus actividades en 2008 y presentó una demanda contra el Estado salvadoreño, pues no logró la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su proyecto.

Chalatenango, en cambio, carece de antecedentes mineros, por lo que allí las

1. Por ejemplo, véase el caso de la lucha contra la minería en Costa Rica durante la década de 1990 (Cartagena, 2000), y de los movimientos surgidos en Guatemala, Honduras y Nicaragua (Hurtado, 2007).
2. El artículo no se extiende en eventos más allá de los primeros meses de 2009. Han quedado fuera del relato y del análisis hechos posteriores, como el asesinato de tres personas en el departamento de Cabañas, crímenes que se atribuyen al activismo que las víctimas desarrollaban en contra de la minería metálica.
3. Específicamente, se ha usado el término “socioambientalismo” para hablar de “los movimientos sociales influenciados por el ambientalismo” (Viola, 1992). Aquí se propone comprender el socioambientalismo como la influencia mutua entre ambientalistas y otros sectores del movimiento social.

exploraciones están en una etapa menos avanzada. Hasta agosto de 2007 eran seis los municipios cubiertos por igual número de licencias de exploración en el departamento (Au Martinique, 2006; Henríquez, 2008, p. 17). De todos los proyectos en Chalatenango, son las concesiones adyacentes de Potonico y Ojo Blanco las más exploradas. La compañía canadiense Au Martinique Silver Inc. —rebautizada Aura Silver Inc. en 2006— se hizo cargo de dichas exploraciones en 2004. De acuerdo a Martinique, la exploración sería de tipo subterránea, igual que en El Dorado (Beltrán, 2006).

Si bien existen concesiones de exploración minera en otros departamentos del país, han sido los dos proyectos mencionados los que han motivado el origen y desarrollo del movimiento de oposición a la minería en El Salvador⁴.

1.2. El contexto sociopolítico local

La zona norte y oriente de Chalatenango presenta una fuerte cohesión social y política, resultado de una larga historia de organización campesina y comunitaria⁵. Adicionalmente, los municipios de Chalatenango son bastante pequeños en territorio y población⁶. Todo ello favorece la realización de asambleas y consultas ciudadanas con bastante frecuencia, en un ejercicio casi directo de la democracia: “Aquí, los alcaldes son líderes comunales: han estado en directivas de CCR, directivas comunales, fueron los líderes en aquella época de la guerra, eso nos identifica, estar juntos siempre. Los alcaldes promueven mucho la organización” (Tobar, 2006, entrevista).

En el municipio de San José Las Flores, por ejemplo, la Asociación de Desarrollo

Comunal (ADESCO) realiza asambleas “cada 15 días, mínimamente”, con niveles de participación bastante altos, en relación con el tamaño de la población (Tobar, 2006, entrevista). San José Las Flores fue una de las primeras repoblaciones del departamento, cuna de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango, conocida por sus viejas siglas CCR (Coordinadora de Comunidades de Refugiados y Repobladores). Actualmente, la CCR es una federación integrada por más de 100 directivas comunales, en 22 municipios del departamento. Su nivel de actividad expresa una cultura de participación bastante difundida (Tobar, 2006, entrevista; Serrano, 2006, entrevista).

El departamento de Cabañas, en cambio, carece de organizaciones comunales tan desarrolladas. Entre las excepciones, hay dos muy conocidas. Una se presenta en Cinquera, en el occidente del departamento, pero fuera del área de influencia directa de El Dorado. Por otra parte, en el municipio de Victoria, en el norte del departamento, específicamente en el cantón de Santa Marta, existe otro asentamiento de repobladores y repatriados. Igual que en otras comunidades surgidas de ese modo, los dirigentes de Santa Marta fundaron una ONG para canalizar el apoyo recibido de grupos solidarios y agencias de cooperación, en este caso la Asociación de Desarrollo Económico de Santa Marta, ADES (Pereira, 2006, entrevista). Actualmente, ADES tiene presencia en varios municipios del departamento, y la movilización popular en contra de la minería surgió con el apoyo de esta ONG. Pero, en su conjunto, Cabañas presenta un desarrollo muy limitado en términos de grupos comunitarios o de ONG propias de la zona (Pineda, en Comité Ambiental, 2006, entrevista). Como se analizará con más detalle

4. En la década de 1990 funcionaba una sola explotación aurífera, la mina San Sebastián en el municipio de Santa Rosa de Lima (Henríquez, 2008). En 1996 se aprobó una nueva Ley de Minería y, para el año 2007, se habían otorgado 29 nuevas licencias de exploración, todas en la franja norte del país (Henríquez, 2008, p. 24).
5. La zona que fue base de apoyo para el FMLN durante el conflicto armado. En la actualidad, en algunos municipios, el partido FMLN logra votaciones arriba del 95% (Tobar, 2006, entrevista).
6. Chalatenango tiene una extensión de 1,917 km² y está dividido en 33 municipios, de los cuales una decena son tan pequeños que su población no llega a dos mil personas.

adelante, se trata de una situación bastante favorable a las prácticas clientelistas de parte de políticos y, también, en este caso, de las empresas mineras.

1.3. Hechos sobresalientes del conflicto

En 2004 se conformó en San Isidro, Cabañas, el Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura. Cuando surge el Comité, ya existía inquietud por el proyecto minero, pero su primera lucha fue para detener los planes de un relleno sanitario regional, iniciativa del alcalde de San Isidro, José Bautista (Arena). Luego que la oposición al relleno logró que el alcalde se retractara, el Comité se decidió a enfrentar la cuestión de la minería (Pereira, 2006, entrevista; Comité Ambiental, 2006, entrevista).

A mediados de 2005, ADES y el Comité habían generado interés por el tema en varias organizaciones que tienen su sede en San Salvador —CEICOM, CESTA, UNES y Fespad—. También algunas agencias de cooperación estaban al tanto de las inquietudes de las ONG nacionales (Flores, 2006, entrevista). Uno de los retos que enfrentaba la naciente alianza era confrontar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Pacific Rim. Con apoyo de iglesias y ONG internacionales, ADES contrató a Robert Moran, un especialista en minería de nacionalidad estadounidense. Las observaciones de este experto fueron entregadas al MARN en octubre de 2005 (Moran, 2005). Dicho análisis se convirtió en un recurso estratégico para el movimiento: “La empresa no termina de superar eso”, dijo un entrevistado (Pereira, 2006, entrevista).

Los últimos meses de 2005 fueron un periodo de mucha actividad para las organizaciones opuestas a la minería. A inicios de septiembre, aparecieron en la prensa las primeras noticias sobre las preocupaciones que generaba el proyecto El Dorado. En octubre, se conformó la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (Flores, 2005, entrevista) y se

realizaron varios foros en el departamento de Cabañas.

La dinámica descrita respondía al proyecto El Dorado, en Cabañas. De manera casi paralela, pobladores de Chalatenango reaccionaron ante las primeras exploraciones emprendidas por la empresa Martinique. Todo comenzó en el municipio de San José Las Flores (Torres, 2006, entrevista). Una persona integrante del concejo municipal sorprendió a varios trabajadores de la minera “cortando los alambres” para poder ingresar a una propiedad (Tobar, 2006, entrevista; Torres, 2006, entrevista). Ello debió ocurrir en agosto de 2005, pues a principios de septiembre se realizó una asamblea donde el alcalde informó de la situación a la comunidad. A partir de allí, se comenzó a buscar información acerca de los impactos de la minería, por medio de los contactos internacionales de la Asociación Ecológica de Chalatenango (ASECHA) y de misiones religiosas (Tobar, 2006, entrevista; Torres, 2006, entrevista). La organización guatemalteca Madreselva envió informaciones utilizadas en el proceso de resistencia a la minería en San Marcos, Guatemala: “Después de ver los videos, la información, la gente dijo: ‘No, paremos a los trabajadores’”, indica Tobar.

De modo que, un lunes de septiembre, se reunieron alrededor de 70 pobladores de San José Las Flores y Guarjila, para detener el paso de los trabajadores que la empresa movilizaba desde fuera de la zona. Los empleados se marcharon, llevándose consigo el equipo que se mantenía en el lugar. El miércoles siguiente, dos representantes de la empresa, un guatemalteco y un estadounidense, se reunieron con los líderes de Las Flores, en la casa municipal. Los habitantes volvieron a exigir que se suspendieran los trabajos de exploración. Días después, la minera volvió a enviar a los trabajadores, y los lugareños respondieron con una concentración más grande, movilizand o población de Guarjila, Las Flores, Arcatao y Nueva Trinidad. De nuevo, se obligó a los mineros a retirarse, esta vez escoltados por los manifestantes. Tobar

recuerda que esta acción se realizó el 10 de octubre, y participaron alcaldes, diputados, sacerdotes, líderes comunales, representantes de la CCR y de CORDES (Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador). Desde entonces, los mineros detuvieron sus exploraciones (Tobar, 2006, entrevista)⁷.

Al año siguiente, en 2006, los proyectos mineros en Chalatenango y Cabañas pasaron a ser tema de debate nacional. El 13 de enero, el obispo de Chalatenango publicó una declaración en contra de la minería de oro y del proyecto hidroeléctrico El Chaparral (Diócesis de Chalatenango, 2006). Por otra parte, a lo largo del primer semestre creció el número de participantes en la Mesa Nacional, que a mediados de ese año sumaba las siguientes organizaciones:

- ADES: Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta.
- Cáritas El Salvador (Iglesia católica).
- CCR: Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango.
- CEICOM: Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio.
- CESTA: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiaada.
- Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura.
- CRIPDES: Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador.
- FESPAD: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
- UCRES: Unión de Comunidades Rurales del Norte de San Salvador y La Libertad.

- UNES: Unidad Ecológica Salvadoreña.

En esta alianza, el sector ambientalista está representado por CESTA, UNES y el Comité Ambiental de Cabañas. Las dos primeras son ONG especializadas en lo ambiental, y el Comité es una organización de base. El resto de organizaciones son redes comunales y ONG, la mayoría de estas con una historia de trabajo en comunidades rurales y, en menor medida, urbanas. Todas las organizaciones en la Mesa, en aquel momento, con excepción de CCR y CEICOM, tenían la experiencia de haber participado en luchas comunales de tipo ambientalista.

En junio de 2006, la Mesa Nacional se dio a conocer en el marco de una “semana de acción contra la minería metálica”, durante la cual se realizaron foros en San Salvador, San José Las Flores, El Paisnal, Sensuntepeque y San Miguel. También se realizaron una conferencia de prensa, actividades culturales y una marcha en San Salvador. Pocas semanas después, del 22 al 24 de julio, se realizó una marcha desde Chalatenango hacia la capital, por parte de los habitantes de los municipios del oriente del departamento, acompañados por alcaldes, diputados y militantes del partido FMLN (Hernández, 2006). Esta actividad no fue organizada por la Mesa, sino por el FMLN (Belloso, 2008, entrevista).

El 23 de agosto se realizó otra marcha, esta vez en el municipio de San Isidro, Cabañas, tras la cual se entregó una carta y otros documentos al alcalde (Comité Ambiental, 2006, entrevista). Esa actividad tuvo un fuerte impacto en las opiniones de la población, pues nunca se había realizado una marcha en el departamento (Juan José, en Comité Ambiental, 2006, entrevista).

Además de estas actividades públicas, las organizaciones de la Mesa se reunieron con distintos funcionarios públicos, entre ellos diputados/as y el entonces ministro de

7. El último reporte de Martinique sobre el avance de sus exploraciones está fechado en febrero de 2006, donde anuncia haber completado la “primera fase” de exploración (Au Martinique Silver Inc., 2006).